



CSJ 791/2016

ORIGINARIO

Peugeot Citroën Argentina S.A.
c/ Santa Fe, Provincia de s/
acción declarativa de certeza.

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Buenos Aires, 11 de julio de 2024

Vistos los autos: "Peugeot Citroën Argentina S.A. c/ Santa Fe, Provincia de s/ acción declarativa de certeza", de los que

Resulta:

I) A fs. 104/129 vta. se presenta Peugeot Citroën Argentina S.A. y deduce acción declarativa en los términos del artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, contra la Provincia de Santa Fe, con el fin de que se despeje el estado de incertidumbre en el que dice encontrarse frente a la pretensión de la demandada de aplicarle una alícuota diferencial más alta en relación al impuesto sobre los ingresos brutos, por su actividad industrial de "fabricación de vehículos automotores", por el hecho de no encontrarse radicada en la jurisdicción provincial.

Ello, con sustento en lo dispuesto en el artículo 7°, inciso a bis de la ley 3650, incorporado por el artículo 8° de la ley 13.286 y sustituido por el artículo 77 de la ley 13.525; en el decreto 2707/2012 y en la Resolución General de la Administración Provincial de Impuestos 14/2012, todos de la referida provincia.

Solicita que el Tribunal se pronuncie sobre la invalidez constitucional de la normativa local citada y de la pretensión fiscal en ella motivada, plasmada en la Nota 026-A.P. del 23 de marzo de 2016, por entender que violan abierta y directamente los artículos 8°, 9°, 10, 11, 16, 28, 31, 75 -incs. 1°, 10 y 13- y 126, de la Constitución Nacional.

Manifiesta que la Provincia de Santa Fe, a través de la nota ya indicada, la intimó a rectificar la declaración jurada correspondiente al período fiscal 02/2016 y procedió a

exigirle la aplicación de la alícuota general del 4,5% para el cálculo de las sumas a tributar en concepto de ingresos brutos, por no encontrarse la accionante radicada en esa jurisdicción.

Indica que la actora es una empresa cuya actividad esencial es la fabricación de vehículos automotores en todo el país, que tributa el impuesto sobre los ingresos brutos bajo el régimen del Convenio Multilateral.

Sostiene que la pretensión impositiva de gravar con una alícuota diferencial mayor los ingresos obtenidos por la actividad desarrollada por Peugeot Citroën Argentina S.A., en virtud de considerar a la empresa radicada fuera de la Provincia de Santa Fe, supone una directa y clara afectación de la cláusula comercial y del principio de razonabilidad, por cuanto perturba las actividades interjurisdiccionales que desarrolla la parte actora y, al mismo tiempo, violenta la garantía de igualdad. Asimismo, expresa que el régimen impugnado supone una violación al derecho de comerciar libremente, así como a la prohibición del establecimiento de aduanas interiores y a la pirámide normativa federal establecida en el artículo 31 de la Carta Magna.

II) A fs. 149/150 el Tribunal declaró su competencia originaria para entender en la presente causa. A su vez, hizo lugar a la medida cautelar solicitada en el escrito de inicio, por lo que dispuso, en resumen, que el Estado provincial debía abstenerse de reclamar a la actora las diferencias pretendidas por el fisco local en concepto de impuesto sobre los ingresos brutos, por la actividad "Fabricación de vehículos automotores" (cód. 341000), de las que daba cuenta la Nota 026-A.P. del 23 de marzo de 2016, así como de trabar cualquier medida cautelar

*Corte Suprema de Justicia de la Nación*

administrativa o judicial sobre el patrimonio de la sociedad, todo ello hasta que se dictara sentencia definitiva en esta causa.

III) A fs. 180/193 la Provincia de Santa Fe contesta la demanda y solicita su rechazo.

Tras las negativas de rigor, alega que la actora solo postula genéricamente una discriminación, sin discernir de qué modo se concretaría en un "detrimento económico sustancial y relevante". Luego aduce que la alícuota cuestionada no es exagerada, y que produce una restricción en la circulación económica tan razonable como otras (peajes, tasas, normas de salubridad, entre otras).

Esgrime que la creación de categorías legales basadas en la ubicación territorial del contribuyente, no produce necesariamente un resultado discriminatorio. Afirma que no se violan los principios de razonabilidad e igualdad. Refiere que el modo en que la provincia demandada ha ejercido su potestad tributaria, en modo alguno colisiona con la cláusula de comercio.

En este contexto, dice, las normas fiscales impugnadas no pueden ser tildadas de "discriminatorias". Por último, expone los motivos por los que considera que están ausentes los presupuestos de la acción declarativa.

IV) A fs. 253 obra el dictamen de la señora Procuradora Fiscal acerca de las cuestiones constitucionales propuestas, que remite a lo dictaminado en su oportunidad en la causa CSJ 114/2014 (50-H)/CS1 "Harriet y Donnelly S.A. c/ Chaco, Provincia del s/ acción declarativa de certeza", donde

opinó, en lo que aquí interesa, que no se había acreditado la existencia de "causa" o "caso contencioso" que permita la intervención judicial.

Por último, a fs. 254 se pasan los autos a sentencia.

Considerando:

1°) Que, tal como lo ha decidido el Tribunal a fs. 149/150, esta demanda corresponde a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, según los artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional.

2°) Que la acción deducida constituye una vía idónea para motivar la intervención del Tribunal, pues no se trata de dar solución a una hipótesis abstracta sino que se propone precaver los efectos de la aplicación de la ley local 3650 (modificada por las leyes 13.286 y 13.525 y el decreto provincial 2707/2012), a la par de fijar relaciones legales que vinculan a las partes en el conflicto (Fallos: 311:421; 318:30; 323:1206 y 327:1034).

En ese sentido, en el presente caso se advierte que ha mediado una conducta estatal explícita de la demandada, dirigida a la aplicación de la alícuota del impuesto sobre los ingresos brutos que la aquí actora cuestiona (Fallos: 311:421 y 328:4198).

En efecto, la actividad desplegada por la autoridad provincial, de la que da cuenta la prueba documental agregada a la causa (ver Nota 026-A.P., fs. 36/37) demuestra que la controversia es actual y concreta (Fallos: 310:606 y 311:421).

3°) Que en cuanto al fondo del asunto, la cuestión a resolver en el *sub lite* presenta sustancial analogía con la ya examinada y resuelta por el Tribunal en Fallos: 340:1480 y en la causa CSJ 114/2014 (50-H)/CS1 "Harriet y Donnelly S.A. c/

*Corte Suprema de Justicia de la Nación*

Chaco, Provincia del s/ acción declarativa de certeza", sentencia del 31 de octubre de 2017, a cuyos fundamentos y conclusiones corresponde remitir en cuanto fueren aplicables al caso de autos, en razón de brevedad y con el propósito de evitar repeticiones innecesarias.

4°) Que en su mérito, en el caso concreto, la aplicación de la normativa local impugnada, al gravar con la alícuota del 4,5% la actividad industrial ya referida de la actora, obstaculizaba el desenvolvimiento del comercio entre las provincias.

5°) Que, en tales condiciones, a la luz de los preceptos constitucionales examinados en las causas citadas en el considerando 3° precedente, y de los criterios fijados por esta Corte a su respecto, en el presente proceso queda en evidencia la discriminación generada por la legislación provincial en función del lugar de radicación del contribuyente, en tanto se lesionaba el principio de igualdad (Constitución Nacional, artículo 16), y se alteraba la corriente natural del comercio (Constitución Nacional, artículos 75, inciso 13, y 126), instaurando así una suerte de "aduanas interiores" vedada por la Constitución Nacional (artículos 9° a 12), para perjudicar a los productos foráneos en beneficio de los manufacturados en su territorio, extremo que conduce a la declaración de invalidez de la pretensión fiscal de la demandada (Fallos: 340:1480).

Por ello, habiendo dictaminado la señora Procuradora Fiscal, se decide: Hacer lugar a la demanda entablada por Peugeot Citroën Argentina S.A. contra la Provincia de Santa Fe. En consecuencia, declarar la inconstitucionalidad de los artículos 7°, inciso a bis y 6°, párr. 3° b, ambos de la ley 3650 (incorporados por los artículos 8° y 9° de la ley 13.286 y

modificados por los artículos 77 y 74 de la ley 13.525 y el artículo 1° del decreto 2707/2012) y del artículo 2° de la resolución general API 14/2012, todos de la Provincia de Santa Fe, en cuanto establecían un régimen de alícuotas diferenciales en el impuesto sobre los ingresos brutos a la actividad industrial en razón del lugar de radicación de las empresas que la desarrollan, como así también la de la pretensión fiscal fundada en dicha normativa (Nota 026-A.P.). Con costas a la vencida (artículo 68, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Notifíquese, comuníquese esta decisión a la Procuración General de la Nación y, oportunamente, archívese.



CSJ 791/2016

ORIGINARIO

Peugeot Citroën Argentina S.A.
c/ Santa Fe, Provincia de s/
acción declarativa de certeza.

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Parte actora: **Peugeot Citroën Argentina S.A.**, representada por sus **letrados apoderados, doctores Verónica Chantal Monsalve y Eduardo Marcelo Gil Roca.**

Parte demandada: **Provincia de Santa Fe**, representada por sus **letrados apoderados, doctores Rubén Fernando Boni y Diego López Olaciregui.**